

Reflexiones sobre la doctrina de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus votos particulares

*Mauricio I. Del Toro Huerta**

Sumario: A manera de introducción; La importancia de los votos particulares en la sentencia internacional; El valor pragmático de los votos particulares; Las opiniones de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; La voz del juez Rodolfo Piza Escalante. In memoriam; Un concierto de voces para la libertad: otros desarrollos posteriores; Un desarrollo jurisprudencial paralelo; Comentario final.

A manera de introducción

En primer lugar, quiero dejar expresada mi enorme satisfacción y el alto honor que para mi representa el participar en esta obra en homenaje a un eminente jurista como lo fue el Dr. Rodolfo Piza Escalante. Con esa intención he considerado oportuno recordar a quien fue-

* Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El autor quiere agradecer al doctor Sergio García Ramírez por su especial motivación a escribir este texto.

ra, entre otros muchos altos cargos, juez y primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de algunas de las reflexiones expresadas en sus votos particulares emitidos durante los primeros años de vida de ese alto tribunal interamericano; reflexiones que de alguna manera contribuyeron al desarrollo progresivo del Derecho internacional de los derechos humanos. Con ello quiero destacar la importancia que los votos y opiniones particulares de los jueces tienen para la comprensión, estudio y desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos. Espero, así, contribuir a la difusión del pensamiento que, desde diferentes puntos de vista, ha revolucionado al sistema jurídico internacional con el único objetivo de salvaguardar de manera efectiva los derechos y libertades fundamentales.

La importancia de los votos particulares en la sentencia internacional

Como en todos los órganos colegiados, en particular, en los tribunales internacionales, si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, éstos tienen la facultad de añadir opiniones individuales o disidentes¹. Generalmente, los jueces hacen uso pro-

¹ La expresión *opinión individual*, “designa no sólo el simple enunciado del desacuerdo de un miembro de [un órgano jurisdiccional internacional] sobre los motivos dados por éste en una decisión de la cual se acepta la parte dispositiva, sino también la exposición oficialmente presentada por los jueces de manera individual o conjunta sobre los motivos o razonamientos en los cuales considera que debe fundamentarse la decisión mencionada.” Por otra parte, la *opinión disidente* emitida por un juez “es su exposición oficialmente presentada de los motivos por los cuales considera no poder estar de acuerdo con el punto de vista de la mayoría del tribunal que dictó la sentencia”. Cfr. Gómez-Robledo Verdusco, Alonso, “Opinión disidente” y “Opinión individual”, en *Diccionario de Derecho*

Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante

lijo de esta facultad y es común que tanto las sentencias como las opiniones consultivas expresen puntos de vista particulares, sea de manera concurrente o disidente, respecto de la decisión de la mayoría². Este hecho generalizado que quizá pudiera parecer de poca o escasa relevancia (pues en definitiva es la resolución de que se trate la que tiene efectos vinculantes, si hablamos de una sentencia dictada en ejercicio de la competencia contenciosa, o efectos jurídicos innegables altamente persuasivos si nos referimos a una opinión consultiva) reviste singular importancia en el desarrollo progresivo del Derecho internacional, en general y en el Derecho internacional de los derechos humanos, en particular, pues tales opiniones, representan, entre otras cosas, análisis de cuestiones fundamentales para la aplicación e interpretación del Derecho internacional; preocupaciones legítimas de *lege ferenda* o críticas, directas o veladas, sobre el sentido de la resolución que permiten al lector identificar de manera inmediata aspectos que de otra forma requerirían de largas horas de estudio y reflexión³.

Internacional, Porrúa-UNAM, México, 2001, p. 251-252. Esta facultad de emitir opiniones particulares está establecida en los artículos 57 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; 45.2. del Protocolo XI a la Convención Europea de Derechos Humanos y 66.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- 2 Un ejemplo de esta situación es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la *Legalidad de la amenaza o del uso de armas nucleares* de 8 de Julio de 1996, en la que los catorce jueces que participaron emitieron opiniones particulares y en conjunto, tanto concurrentes como disidentes.
- 3 En palabras de Alonso Gómez-Robledo Verduzco “una comprensión íntegra de las implicaciones reales de cualquier fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia –nosotros agregaríamos de cualquier tribunal internacional– no se alcanza únicamente con el estudio de la sentencia y sus alegatos, sino que también es imprescindible el análisis de las opiniones individuales y/o disidentes que en su caso se hubieren emitido.” “Opinión disidente”, en *Diccionario de Derecho Internacional*, Op. cit., p. 251.

Si bien existen muchas razones por las cuales los jueces ejercen dicha facultad, ya sea que deseen ahondar o abundar sobre aspectos que consideran no fueron suficientemente tratados en la resolución o para marcar distancia respecto del sentido de la mayoría, lo cierto es que tales opiniones responden a una necesidad personal y espontánea de su autor por hacer énfasis en la aplicación o interpretación de determinada normativa internacional y, en este sentido, tales opiniones se asemejan a lo que se conoce como *doctrina*, pues procuran explicar el sentido de cierta norma ya existente (*de jure conditio o de lege lata*) o se proponen desarrollar tales normas o inducir la creación de otras nuevas (*de jure condendo o de lege ferenda*)⁴ lo que nos lleva a recordar, aunque sea brevemente, el papel de la doctrina en la práctica del Derecho internacional.

El valor pragmático de los votos particulares

Como es ampliamente conocido en el ámbito del Derecho internacional, la doctrina juega un papel significativo en su desarrollo y codificación. Si bien es cierto que su papel ha variado a lo largo del tiempo y en la actualidad su influencia en la aplicación e interpretación de la normativa internacional es mucho menor que en el pasado, es también innegable que la doctrina sigue siendo, en particular las opiniones doctrinales “colectivas”⁵, un factor importante para comprender el estado

⁴ Cfr. Novak Talavera, Fabián y García-Corrochano Moyano, Luis, *Derecho Internacional Público*, Tomo I, Pontificia Universidad Católica del Perú-Instituto de Estudios Internacionales, Perú, 2001, p. 439.

⁵ Cabe recordar que la doctrina comprende tanto obras individuales como los trabajos colectivos de instituciones científicas internacionales. Generalmente se citan entre las instituciones más representativas de la doctrina dominante: el Instituto de Derecho

actual de la materia, así como su desarrollo progresivo⁶.

En el ámbito de las fuentes del Derecho internacional, tal como lo establece el artículo 38, párrafo 1, inciso d), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se reconoce a las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho. Si bien no puede considerarse a la doctrina entre las fuentes creadoras del Derecho internacional –como ya lo señalaba Charles Rousseau– no debe olvidarse que favorece la elaboración del derecho positivo y ayuda a su concreción, por medio de un trabajo de análisis, de clarificación y de sistematización previa;⁷ en palabras de Fernando Mariño, “la doctrina elabora los marcos conceptuales necesarios para la argumentación jurídica, bien dentro del positivismo tradicional, bien abriendo nuevos campos de análisis”⁸.

Internacional, el International Law Association, el World Peace Through Law Centre, la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, entre otros. Así también deben considerarse los trabajos e informes de los relatores especiales y de la Comisión de Derecho Internacional.

⁶ En el pasado, la influencia de la doctrina en la aplicación e interpretación del Derecho internacional público era muy poderosa, en particular respecto de la existencia o no de una costumbre internacional. Piénsese en las obras de destacados internacionalistas, tales como: Vitoria, Suárez, Gentili, Grocio, Vattel, Calvo, Rousseau, Guggenheim, Verdross. Fue tal la importancia de la doctrina que, en su tiempo, influyó para su incorporación como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho al Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional y posteriormente en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Cfr. Gutiérrez Espada, Cesáreo, *Derecho Internacional Público*, p. 568 y ss; Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition, Oxford Univesity Press, 1999, p. 24-25; Sepúlveda, César, *Derecho Internacional*, 20ª edición, Porrúa, México, 2000, p. 106 y ss.

⁷ Rousseau, Charles, *Derecho Internacional Público*, Tercera edición, Ariel, Barcelona, 1966, p. 76.

⁸ Mariño Menéndez, Fernando, *Derecho Internacional Público (Parte general)*, Tercera edición, Editorial Trotta, España, 1999, p. 380.

En este sentido, normalmente se identifica a las opiniones particulares de los jueces internacionales dentro del ámbito de la doctrinal, aunque hay quienes, como Michel Virally, consideran que las opiniones particulares y los votos disidentes de éstos revisten gran importancia y merecen particular atención, no sólo a causa de la reputación y de los cargos de sus autores, sino también en virtud de las condiciones en que se producen sus opiniones. Por lo que —en opinión del jurista francés— podría decirse que a dichas opiniones corresponde una jerarquía intermedia entre las enseñanzas de los publicistas y las decisiones judiciales⁹.

Las opiniones particulares de los jueces también juegan un papel importante en la determinación del valor pragmático de la doctrina¹⁰, si se considera que en las sentencias de los tribunales internacionales son escasas las referencias expresas a los juristas, pues al ser colectivas se evita hacer mención de citas doctrinales por lo que generalmente se encuentran expresiones genéricas a “las enseñanzas” u “opiniones” de la doctrina; sin embargo, en los votos particulares, sean disidentes o concurrentes con el sentido de la sentencia definitiva, es común encontrar referencias a los trabajos de los juristas, tanto individuales como colectivos¹¹. De esta for-

⁹ Virally, Michel, “Fuentes del Derecho Internacional”, en Sorensen, Max (ed.), *Manual de Derecho Internacional Público*, Quinta reimpresión, FCE, México, 1994, p. 181.

¹⁰ Sobre el valor de las opiniones particulares, Gómez-Robledo señala que “dependiendo del prestigio o solidez del razonamiento de su autor, estas opiniones pueden convertirse con el tiempo en criterios doctrinales de máxima autoridad, y poseen incluso gran importancia para el desarrollo del Derecho internacional público.” Cfr. “Opinión disidente”, en *Diccionario de Derecho Internacional*, Op. cit., p. 251.

¹¹ Cfr. Brownlie, Op. cit., p. 25, Novak y García-Corrochano, Op. cit., p. 443, y López-Bassols, Hermilo, *Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos*, Porrúa, México, 2001, p. 52.

ma, tales opiniones nos muestran la importancia que tiene la doctrina en determinados ámbitos de la práctica judicial, sin ignorar, por supuesto, que desde un punto de vista técnico, en palabras de Charles Rousseau “no cabe pensar en incorporar la *doctrina* entre las fuentes creadoras del derecho internacional, puesto que la tarea de elaboración doctrinal es, en realidad y exclusivamente, una tarea crítica”¹². Lo que no resta importancia al hecho de que los estudios cumplan una función creativa.

Las opiniones de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el marco de la jurisdicción interamericana de derechos humanos, al mes de junio del año 2002, en un total de 94 resoluciones dictadas, tanto de excepciones preliminares, como de fondo, de interpretación y reparación, se han emitido alrededor de 105 votos particulares de entre los cuales siete se han hecho de manera conjunta y alrededor de quince corresponden a jueces *ad hoc*. Asimismo, en sus 16 opiniones consultivas emitidas hasta la fecha señalada, se han pronunciado igual número de votos particulares y uno conjunto, que aunado al expresado en el denominado “*Asunto de Viviana Gallardo y otras*” suman un total de 18 votos. A todos ellos deben agregarse los expresados en las resoluciones correspondientes a medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana. Esta simple revisión panorámica muestra la forma constante en que los jueces de la Corte han ejercido su facultad de expresar sus opiniones particulares, las que representan un abanico amplio

¹² Op. cit, p. 76.

de puntos de vista, algunos más breves otros más extensos, algunos meras aclaraciones otros análisis más profundos, a veces expresan críticas incisivas a veces apologías apasionadas, pero siempre pautas indispensables para la reflexión, tanto del caso u opinión en particular, como de la trascendencia del fallo para el Derecho internacional de los derechos humanos en general.

La voz del juez Rodolfo Piza Escalante

In memoriam

En su desempeño como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el doctor Piza Escalante emitió un total de nueve opiniones individuales, dos en las resoluciones de 13 de noviembre de 1981 y 8 de septiembre de 1983, respecto del *Asunto de Viviana Gallardo y otras*, respectivamente; una en la sentencia de fondo en el *Caso Velásquez Rodríguez*, de 29 de julio de 1988; dos más en las resoluciones de “Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria” en los casos *Velásquez Rodríguez* y *Godínez Cruz*, de 17 de agosto de 1990; y cuatro, respectivamente, en las opiniones consultivas *sobre Restricciones a la pena de muerte* (Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983); *Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización* (Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984); *La colegiación obligatoria de periodistas* (Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985) y *Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta* (Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986).

Cada una de estas opiniones individuales, sean concurrentes o disidentes con la mayoría, expresan consi-

Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante

deraciones de interés que ameritarían ser revisadas de modo especial; sin embargo, aquí haremos referencia sólo a aquellas emitidas durante la tramitación del *Asunto de Viviana Gallardo y otras*, y en la sentencia de fondo del *Caso Velásquez Rodríguez*, por considerarlas de singular importancia para el desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos en el Continente, en particular, respecto de la participación de las víctimas como parte sustantiva en el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde su primer voto disidente respecto de la decisión del 13 de noviembre de 1981 en el *Asunto de Viviana Gallardo y otras*, que al mismo tiempo es el primer voto que se presenta en la primera resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al conocer de un asunto sometido a su consideración, el Juez Piza consideró que en el procedimiento ante dicho tribunal los seres humanos aparecen “como la verdadera ‘parte’ activa, ofendida, titular de los derechos cuya protección se persigue, e imponiendo [al Estado como parte pasiva] las consecuencias correspondientes, a favor de los segundos.” Mientras que la Comisión Interamericana “no tiene nunca la condición de parte sustancial, actora ni demandada, sino siempre la de parte *sui generis*, puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un “ministerio público” del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”¹³.

Esta afirmación, que fuera reiterada nuevamente en sus votos disidentes a la resolución de 8 de septiembre de 1983 en el *Asunto de Viviana Gallardo y otras*, y a la

¹³ Párr. 4.

sentencia de fondo del *Caso Velásquez Rodríguez*¹⁴, sería el motor de críticas constantes a la interpretación, según la cual, las víctimas o presuntas víctimas de determinada violación no se consideraban como parte en el proceso ante la Corte¹⁵. Al respecto enfatiza que “no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, ‘parte activa’ sustancial, su condición autónoma de ‘parte activa’ procesal [pues] lo único que la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] vea al ser humano es la ‘iniciativa de la acción’ (art. 61.1), limitación que, como tal, es ‘materia odiosa’ a la luz de los principios, de manera que debe interpretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la conclusión de que también le está

¹⁴ Párrs. 40 y 6, respectivamente.

¹⁵ Cabe recordar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos encomienda la supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados al ratificar dicho instrumento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un Estado Parte en la Convención ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte, ésta última está facultada para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención sobre cualquier violación a los derechos humanos reconocidos en la misma; siendo la Comisión Interamericana y los Estados los únicos facultados para someter determinado caso ante la Corte, no así los individuos directamente (como sí es posible ante la Corte Europea de Derechos Humanos después de la entrada en vigor del Protocolo XI a la Convención de Roma a partir del 1 noviembre de 1998). En este sentido, mientras el artículo 44 de la Convención Americana faculta a cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental reconocida en uno o más Estados miembros, a presentar peticiones que contengan denuncias o quejas de violaciones a la misma por un Estado Parte ante la Comisión, el artículo 61 limita a los Estados partes y a la Comisión el derecho de someter un caso a la decisión de la Corte. Esta cláusula abre el debate sobre el papel de las víctimas en el proceso ante la Corte y sobre su calidad de parte material o sustantiva y los respectivos derechos que como tal le corresponden. Cfr. Faúndez Ledesma, Héctor, *El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos institucionales y procesales*, 2ª. Ed., Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1999.

vedada al ser humano su condición autónoma de ‘parte’ en el proceso, una vez que éste se haya iniciado¹⁶.

En esta última opinión disidente, el Juez Piza abundó en el sentido de que “las ‘partes’ en sentido sustancial son [...] independientemente de cuál haya sido la que introdujo la instancia: a) el Estado [...] como ‘parte pasiva’, a la que se imputan las violaciones y deudora eventual de su reparación [pues] en el orden internacional de la protección de los derechos humanos, el Estado es el único sujeto pasible de condenatoria y de sanción; y b) como ‘parte activa’, titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una eventual sentencia estimatoria, las víctimas [...] La Comisión no es ‘parte’ en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por la sentencia”¹⁷.

Un concierto de voces para la libertad: otros desarrollos posteriores

Al paso de los años y con el mismo objeto de esclarecer aspectos sustantivos y adjetivos medulares del Derecho internacional de los derechos humanos, otros jueces al expresar sus opiniones particulares en sus votos concurrentes o disidentes han hecho referencia a la cuestión de las “partes” en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación se presentan algunos fragmentos de tales consideraciones como ejemplos claros que sirven de criterios orientado-

¹⁶ Párrafo 8 del voto razonado a la decisión del 13 de noviembre de 1981 en el *Asunto Viviana Gallardo y otras*, reiterado en el voto a la resolución de 8 de septiembre de 1983 en el mismo asunto, párr. 40.

¹⁷ Párr. 39.

res para la construcción y perfeccionamiento del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Respecto de la consideración de las víctimas como parte demandante, el juez Antônio Augusto Cançado Trindade en sus votos razonados a las sentencias sobre excepciones preliminares a los casos *Castillo Páez* y *Loayza Tamayo*, hace referencia a la necesidad de “asegurar el equilibrio o igualdad procesal de las partes ante la Corte —es decir entre los peticionarios demandantes y los gobiernos demandados— esencial a todo sistema jurisdiccional de protección internacional de los derechos humanos” y enfatiza que “sin el *locus standi in judicio* de ambas partes cualquier sistema de protección se encuentra irremediabilmente mitigado, por cuanto no es razonable concebir derechos sin la capacidad procesal de directamente vindicarlos”¹⁸.

En el universo del Derecho internacional de los derechos humanos —continúa el juez Cançado— “es el individuo quien alega tener sus derechos violados, quien alega sufrir los daños, quien tiene que cumplir con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, quien participa activamente en eventual solución amistosa, y quien es el beneficiario (él o sus familiares) de eventuales reparaciones e indemnizaciones”¹⁹. Sus reflexiones concluyen con un llamado a la reforma del sistema interamericano de protección al señalar que “cabe *de lege ferenda* superar gradualmente la concepción paternalista y anacrónica de la total intermediación de la Comisión entre el individuo (la verdadera parte demandante) y la Corte, según criterios y reglas claros y precisos, previa y cuidadosamente definidos. En el

¹⁸ Párr. 14.

¹⁹ Párr. 15.

Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante

presente dominio de protección, todo jusinternacionalista, fiel a los orígenes históricos de su disciplina, sabrá contribuir al rescate de la posición del ser humano como sujeto del derecho de gentes dotado de personalidad y plena capacidad jurídicas internacionales”²⁰.

Posteriormente, el mismo juez Cançado Trindade, en su voto concurrente a la sentencia de excepciones preliminares al *Caso Castillo Petruzzi*, de 4 de septiembre de 1998, expone de manera clara y detallada el desarrollo, naturaleza jurídica y alcance del derecho de petición individual en materia de protección internacional de los derechos humanos, destacando que la importancia de ese derecho no ha sido suficientemente resaltada por la doctrina y la jurisprudencia internacionales siendo que, en última instancia, “es por el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual que se garantiza el acceso directo del individuo a la justicia a nivel internacional”²¹.

En opinión del jurista brasileño, el derecho de petición individual “es una conquista definitiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es de la propia esencia de la protección internacional de los derechos humanos la contraposición entre los individuos demandantes y los Estados demandados en casos de supuestas violaciones de los derechos protegidos. Fue precisamente en este contexto de protección que se operó el *rescate histórico* de la posición del ser humano como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de plena capacidad procesal internacional”²².

²⁰ Párr. 17.

²¹ Párr. 2.

²² Párr. 5.

Justicia, libertad y derechos humanos

Este voto no sólo representa una reflexión profunda sobre el desarrollo del derecho de petición individual, sino también marca la pauta para desarrollos de *lege ferenda* al estimar que “en el sistema interamericano de protección, alcanzará el derecho de petición individual su plenitud el día en que pueda ser ejercido por los peticionarios ya no más ante la Comisión Interamericana, pero sí directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La vía *jurisdiccional* constituye la más perfeccionada y evolucionada modalidad de protección internacional de los derechos humanos [...] Trátase de buscar asegurar, ya no sólo la representación directa de las víctimas o de sus familiares (*locus standi*) en el procedimiento ante la Corte Interamericana en casos ya enviados a ésta por la Comisión (en todas las etapas del proceso ...), sino más bien el derecho de acceso directo de los individuos ante la propia Corte (*jus standi*), para traer un caso directamente ante ella, como futuro órgano jurisdiccional único para la solución de casos concretos bajo la Convención Americana [...] Más que todo, este salto cualitativo atendería [...] a un imperativo de justicia. El *jus standi* –no más apenas *locus standi in judicio*– irrestricto, de los individuos, ante la propia Corte Interamericana, representa [...] la consecuencia lógica de la concepción y formulación de derechos a ser protegidos bajo la Convención Americana en el plano internacional, a las cuales debe necesariamente corresponder la capacidad jurídica plena de los individuos peticionarios de vindicarlos”²³.

En este esquema propuesto por el juez Cançado, “la jurisdiccionalización del mecanismo de protección se

²³ Párrs 39, 42 y 43.

Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante

impone a partir del reconocimiento de los roles esencialmente distintos de los individuos peticionarios - la verdadera parte demandante - y de la Comisión (órgano de supervisión de la Convención que presta asistencia a la Corte). Bajo la Convención Americana, los individuos marcan presencia tanto en el *inicio* del proceso, al ejercer el derecho de petición en razón de los daños alegados, como al *final* del mismo, como beneficiarios de las reparaciones, en casos de violaciones comprobadas de sus derechos; no hace sentido negarles presencia *durante* el proceso. El derecho de acceso a la justicia a nivel internacional debe efectivamente hacerse acompañar de la garantía de la igualdad procesal (*equality of arms/égalité des armes*) en el procedimiento ante el órgano judicial, elemento esencial a cualquier mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos, sin el cual estará el mecanismo en cuestión irremediablemente mitigado”²⁴.

En fechas más recientes, el juez Sergio García Ramírez, en su voto concurrente a la sentencia de reparaciones en el *Caso Barrios Altos*, de 30 de noviembre de 2001, expresó de manera sencilla y clara el papel de cada parte en esta etapa del proceso al señalar que en dicha ocasión “la Corte tuvo a la vista un “Acuerdo” sobre reparaciones celebrado entre las partes materiales (el Estado y las víctimas o sus familiares), con intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte formal o solamente procesal. Es evidente que las reparaciones acordadas –al igual que las que pudieran ser dictadas por la Corte, en ausencia de acuerdo– se proyectan sobre los bienes jurídicos (materiales

²⁴ Párr. 44.

Justicia, libertad y derechos humanos

o inmateriales) de las víctimas, como lo es que la Comisión Interamericana tiene la atribución natural e indeclinable, que ejerce a través de diversos actos procesales, de cuidar la observancia de las normas tutelares de los derechos humanos, en beneficio del sistema mismo de protección de estos derechos, más allá —y sin perjuicio— de la satisfacción debida a los destinatarios directos de las medidas reparatoras (víctimas y, en su caso, derechohabientes de éstas)”²⁵.

Como se puede apreciar de la simple lectura de las opiniones que preceden, la discusión doctrinal sobre las “partes” en el proceso ante la Corte que inició desde sus primeros casos en la voz del Dr. Rodolfo Piza continuó siendo una cuestión importante en la reflexión de algunos jueces al expresar sus opiniones individuales. En la actualidad, el Reglamento de la Corte, aprobado el 24 de noviembre del 2000, durante el XLIX Período Ordinario de Sesiones de la Corte, celebrado del 16 al 25 de noviembre del 2000, y con vigencia a partir del 1 de junio del 2001, en su artículo 2, numeral 23, en efecto señala que, como lo enfatizó en su momento el juez Piza, “la expresión ‘partes en el caso’ significa la víctima o la presunta víctima, el Estado y, sólo procesalmente, la Comisión”²⁶.

²⁵ Párr. 3.

²⁶ La reforma al Reglamento de la Corte de noviembre de 2000 comprendió aspectos notables sobre la cuestión terminológica y sobre el papel procesal de la víctima durante todo el proceso ante la Corte, así como sobre la posibilidad de incorporar al expediente actuaciones realizadas por la Comisión Interamericana en el procedimiento previo a la presentación del caso ante la Corte y la de concentrar las diferentes etapas del procedimiento.

Un desarrollo jurisprudencial paralelo

A la par de esta discusión o como parte de la misma, se ha planteado en diferentes votos particulares la cuestión sobre el papel de las víctimas o presuntas víctimas en el proceso ante la Corte; incluso, la propia noción de “víctima” ha tenido un desarrollo jurisprudencial significativo a través de las sentencias del tribunal que algunos jueces han reflejado en sus opiniones individuales²⁷. Al respecto, el Juez Cançado Trindade, en su vo-

²⁷ El significado actual del derecho de petición individual y el papel de la víctima en el proceso interamericano ha evolucionado. Como lo recuerda el jurista Juan Méndez en el sistema interamericano, como en el europeo, se partió de la inexistencia de normas que contemplaran rol alguno para la víctima, más allá de la presentación de la petición. Sin embargo, a través de la práctica jurisprudencial y de sucesivas enmiendas al Reglamento de la Corte, se fueron abriendo los espacios para su participación. En el sistema interamericano desde los primeros casos contenciosos ante la Corte, los peticionarios y los familiares de las víctimas se plantearon la posibilidad de participar activamente en el proceso; en consecuencia, la Comisión los designó como asesores *ad hoc* de su delegación, lo que no objetó la representación del Estado de Honduras y la Corte aceptó. Posteriormente, en la etapa de indemnización existieron algunas diferencias entre las opiniones de la Comisión y los abogados de los familiares de las víctimas sobre el monto y la naturaleza de la indemnización, observaciones que fueron presentadas por la Comisión como anexo a su escrito por el que daba cuenta del fracaso en la negociación con el Estado respecto de tales montos y modalidades de la indemnización. En el fallo sobre el fondo del caso *Godínez Cruz*, la Corte dio a los familiares la oportunidad de presentar sus argumentos en forma independiente a la Comisión, tal como lo había expresado el Juez Rodolfo Piza Escalante en su voto disidente a las sentencias anteriores en el *Caso Velásquez Rodríguez*. (Cfr. “La participación de la víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en *La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos*, editado y presentado por Rafael Nieto Navia, Corte IDH, San José, C.R., 1994, pp. 321 y ss.) En la reforma de 1991 a su Reglamento, la Corte autorizó a los delegados de la Comisión a hacerse asistir por cualquier persona de su elección, pero si se tratase de los abogados de los peticionarios, de las víctimas o de sus familiares, debía hacerse del conocimiento de la Corte tal circunstancia, a fin de autorizar su intervención en los debates a propuesta de la Comisión y para oír su opinión cuando se sometiera a su consideración el desistimiento de la acción o una solución amistosa que pudiera dar fin al proceso. La reforma de 1996, dio un paso adelante, al incorporar el derecho de los representantes de las víctimas o de sus familiares a presentar ante la Corte sus propios argumentos y

Justicia, libertad y derechos humanos

to razonado a la sentencia de 26 de mayo de 2001 sobre reparaciones en el *Caso de los “Niños de la Calle”*, señaló que “es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el que, clara y decididamente, viene a rescatar la posición central de las víctimas, por cuanto encuéntrase orientado hacia su protección y al atendimento de sus necesidades”; en el entendido que el impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en otras áreas del Derecho (tanto público como privado) “ocurre en buena hora, en el sentido de humanizarlas. Este desarrollo muéstrase conforme a los propios fines del Derecho, cuyos destinatarios de sus normas son, en última instancia, los seres humanos”²⁸.

Sobre el concepto de víctima de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, el juez Sergio García Ramírez en su voto razonado concurrente a la sentencia de fondo de 23 de noviembre de 2000 en el *Caso Bámaca Velásquez*, expresó que dicho concepto “reviste fundamental importancia en el Derecho internacional de los derechos humanos, tanto en sus implicaciones sustantivas –para identificar el sujeto pasivo de la lesión, titular de los derechos afectados y de aquellos otros que genera la conducta violatoria–, como por sus consecuencias procesales –para precisar la legitimación y la correlativa capacidad de actuación en diversos momentos del proceso”.

pruebas en forma autónoma a la Comisión en la etapa de reparaciones. Sin embargo, el Reglamento actualmente en vigor, alcanza un umbral mucho más amplio de participación de la víctima al disponer, en su artículo 23, que después de admitida la demanda, “las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso”.

²⁸ Párr. 15 y 16.

Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante

En su voto, el juez mexicano se refiere a la conocida “evolución del concepto de víctima, a partir de la noción nuclear, concentrada en lo que se llamaría la víctima directa, hasta arribar, en su caso, a las nociones ampliadas que se expresan bajo los conceptos de víctima indirecta y víctima potencial, temas largamente explorados y controvertidos” y enfatiza que tal desarrollo “revela claramente el impulso tutelar del Derecho internacional de los derechos humanos, que pretende llevar cada vez más lejos [...] la protección real de los derechos humanos” y concluye con la afirmación de que “el principio favorecedor de la persona humana, que se cifra en la versión amplia de la regla *pro homine* –fuente de interpretación e integración progresiva–, tiene aquí una de sus más notables expresiones”²⁹.

Posteriormente, el juez García Ramírez, recuerda que, mediante una jurisprudencia evolutiva que trabaja sobre las figuras de víctima directa e indirecta y beneficiarios de aquélla, la Corte Interamericana, al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos, prosiguió la elaboración de un concepto amplio de víctima de la violación y subraya que “podría considerar como víctima directa a la persona que sufre menoscabo de sus derechos fundamentales como efecto inmediato de la propia violación: entre ésta y aquél existe una relación de causa a efecto (en el sentido jurídico del vínculo), sin intermediario ni solución de continuidad. En cambio, víctima indirecta sería quien experimenta el menoscabo en su derecho como consecuencia inmediata y necesaria, conforme a las circunstancias, del daño que sufrió la víctima directa. En tal hipótesis, la afectación ocasionada a ésta última sería la fuente del menoscabo que ex-

²⁹ Párr. 3.

perimenta la víctima indirecta. La distinción técnica entre ambas categorías no implica que alguna de ellas revista mayor jerarquía para los fines de la tutela jurídica. Ambas se hallan igualmente tuteladas por la Convención y pueden ser atendidas en la sentencia, tanto para considerarlas, sustantivamente, como sujetos pasivos de una violación, acreedores a reparaciones, como para atribuirles legitimación procesal, de manera genérica e indistinta”³⁰.

Los anteriores comentarios dan cuenta de aspectos significativos que han sido revisados por la Corte al resolver diferentes casos. Por supuesto cada sentencia constituye un precedente y los votos particulares no son otra cosa que notas al margen de sus autores a la decisión final y como tales han de considerarse, sin embargo, en sus votos los jueces recogen reflexiones que si bien no necesariamente son indispensables para resolver el caso en cuestión sí para comprender el estado actual de la jurisdicción internacional.

Comentario final

Muchos otros temas han sido tratados por los jueces a lo largo de sus opiniones particulares, cuestiones de especial relevancia, tanto de naturaleza procesal como sustantiva, que no es posible exponer aquí, pero que son fundamentales para el análisis y comprensión de las razones y argumentos que sustentan las diferentes resoluciones adoptadas por la Corte al resolver sobre los casos sometidos a su conocimiento o al emitir sus opiniones consultivas³¹.

³⁰ Párrs. 4 y 5.

³¹ A manera de ejemplo, por citar sólo algunos de los casos contenciosos

Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante

Aunque es difícil saber en que grado influyen los votos particulares de los jueces de la Corte en la modificación de sus criterios y en el desarrollo del Derecho internacional de los derechos humanos, es claro que tales opiniones ponen de manifiesto aspectos elementales que, dado el conocimiento e inmediatez de los jueces con el sistema interamericano, resultan de enorme interés para entender el estado actual de operatividad del propio sistema, así como para hacer consideraciones de *lege ferenda* con el objeto de perfeccionarlo en aras de una mejor protección internacional de los derechos humanos. Ese creo yo fue el camino que se siguió en ciertas cuestiones a partir del fuerte motor del pensamiento del Dr. Rodolfo Piza Escalante. *Requiescat in pace.*

y sólo algunos de los jueces que más han emitido votos particulares: el juez Antônio Augusto Cançado Trindade se ha pronunciado sobre la excepción de no agotamiento de los recursos internos en sus votos razonados a las sentencias de Excepciones Preliminares de los casos *Gangaram Panday*, *Castillo Páez*, *Loayza Tamayo* de 4 de diciembre de 1991; sobre las limitaciones *ratione temporis* de la competencia de la Corte y el crimen de desaparición forzada de personas en el *Caso Blake*; sobre la violación de la Convención por la propia existencia de una disposición legal sin requerir de un acto de aplicación en sus votos correspondientes a los casos *El Amparo*; *Caballero Delgado y Santana*; *Genie Lacayo*, *Suaréz Rosero*, “*La Última Tentación de Cristo*”; sobre el derecho a la vida y los niños del a calle en el *Caso Villagrán Morales y otros*, sobre el recurso de revisión ante la Corte en el *Caso Genie Lacayo*, sobre la jurisdicción internacional y la cláusula facultativa de reconocimiento de competencia en los casos *Hilaire, Constantine y otros* y *Benjamín y otros*, entre otras opiniones significativas. El juez Sergio García Ramírez se ha pronunciado sobre la cuestión de las leyes de amnistía en la sentencia de reparaciones del *Caso Castillo Páez*, sobre la competencia de la Comisión para aplicar el Derecho internacional humanitario en el *Caso las Palmeras*, sobre el derecho a la verdad y otros temas probatorios en el *Caso Bámaca Velásquez*, sobre las características del allanamiento y otros en el *Caso Barrios Altos*, sobre el régimen consuetudinario indígena en el *Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awás Tingni*, en donde además se pronunciaron conjuntamente los jueces Cançado Trindade, Pacheco Gómez y Abreu Burelli e individualmente el juez Hernán Salgado y el juez Montiel. Otras opiniones se han expresado en los casos *Hilaire, Constantine y otros* y *Benjamín y otros*, etcétera.